

EN CASO DE MEGATOMA DE SAN ANTONIO, SI NO SE ALCANZA UNA SOLUCIÓN, "HAREMOS CUMPLIR LA LEY":

# Ministerio de Vivienda anuncia que en septiembre será demolida la toma situada en terreno usurpado a familia Correa en Quilpué

MAURICIO SILVA

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó que la época electoral —como la que actualmente se vive— inhiba al Gobierno de hacer cumplir fallos cuya ejecución pudiera tener costos políticos, como el desalojar a 10 mil personas de la denominada "megatoma" de San Antonio o del usurpado terreno de la familia Correa en Quilpué.

Acerca del primer caso, sostuvo: "Aquí haremos lo que diga la ley. Hay personas, responsabilidades, instituciones y se cumple la ley, por cierto", dijo ayer, al ser consultado ante la posibilidad de que las comisiones técnicas de su cartera, del municipio y de los dueños del predio invadido por un gigantesco campamento en el cerro Centinela no alcancen un acuerdo —para venderlo a los ocupantes organizados en cooperativas— en el plazo límite, que se extendió hasta el miércoles próximo.

De no lograr un consenso en la materia, de acuerdo con el protocolo formalizado ante la propia Corte de Valparaíso, las mismas comisiones técnicas deberán concordar un método "razonable y paulatino" para cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordena el desalojo.

Ayer, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), aseguró que "las distintas instituciones nos hemos estado reuniendo en forma permanente, primero sobre la base de que ojalá se llegue a acuerdo, pero también preparando una situación que evidentemente es muy compleja de realizar: un desalojo".

Sobre las viviendas que usurpadores levantaron en el predio del ingeniero Alejandro Correa en Quilpué, asesinado



Montes se mostró esperanzado en que un acuerdo evite el desalojo en San Antonio.

en mayo de 2020 por un sicario después de que denunciara la toma a la justicia, Montes dio la palabra a la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, para responder en qué plazo cumplirán el fallo de la Corte de Valparaíso que ordena su demolición.

"Estamos haciendo todas las acciones que nos corresponden para ejecutar la medida de la demolición, esto supone que en el corto plazo vamos a hacerla efectiva, como nos ha ordenado la Corte (...). Estamos por hacerlo lo antes posible y estamos pronosticando dentro de las mesas de trabajo realizarlo en el próximo mes de septiembre", dijo.

La abogada de la familia Correa, Jeannette Bruna, señaló que no ha sido notificada formalmente de alguna fecha y que el Serviu aún no entregaba el catastro de habitantes del campamento.

## Lenta reconstrucción: "Nadie quiso agredir"

Ayer, Montes presidió la entrega de llaves de sus nuevas viviendas a 20 familias de damnificados por el megaincendio en Quilpué, cuya construcción ha sido más ágil debido a que el sector plano no requiere obras de habilitación y los afectados lograron una buena organización, de acuerdo con la directora regional (s) del Serviu, Nerina Paz.

En la ocasión, el secretario de Estado ahondó en sus dichos de la víspera en que aseguró en "El Mercurio" no ser el jefe de la reconstrucción poscatástrofe de febrero de 2024. "Una cosa es la jefatura política de una reconstrucción nacional y otra cosa en la parte operativa" (que en otras ocasiones ha señalado le corresponde a la seremi Paredes), sostuvo Montes.

Añadió, respondiendo a las reacciones que desataron sus palabras, que con tal definición "nadie quiso en ningún caso agredir" y que "aquí el Ejecutivo ha estado presente trabajando con la gente".

Las nuevas viviendas, a un costo de 1.450 UF cada una, benefician a un sector de adultos mayores en el que las llamas cobraron la vida de seis vecinos. Su superficie es de 66 m<sup>2</sup>, cuentan con piso cerámico y flotante y puertas de pino oregón.

Según Montes, con ellas suman 241 las viviendas terminadas del universo de 4.500 familias damnificadas. A 2.748 se le han asignado subsidios.

JONATHAN MANCILLA